

C.A. de Santiago

Santiago, veintitrés de abril de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

En causa Rol C 8951-2021, del Tercer Juzgado Civil de Santiago, la demandante, Hotel Nippon S.A., dedujo recurso de apelación en contra de la resolución de 25 de marzo de 2022, modificada por la de 16 de mayo del mismo año, que recibió la causa a prueba y fijó los hechos sobre los cuales ella debía recaer.

Se acumuló a esta causa recurso de casación en la forma y apelación de la parte demandante, y apelación de la demandada, Fisco de Chile, respecto de la sentencia definitiva dictada el 1 de septiembre de 2023, que resolvió lo siguiente:

*I.- Que, se rechazan, sin costas, las tachas deducidas por el demandado en contra de los testigos Sr. Felipe Andrés Jorge Pardo Alarcón y Sra. Ingrid Eliana Leiva Jelvez;*

*II.- Que, se acoge parcialmente la demanda deducida por Hotel Nippon S.A., en contra del Fisco de Chile, condenándolo al pago de la suma única y total de \$63.692.370, por concepto de servicios de residencia sanitaria, con los reajustes a intereses que procedan, en la forma establecida en el considerando vigésimo tercero, desestimándose en lo demás.*

*III.- Que, cada parte soportará sus costas.*

**CONSIDERANDO**

**I.- En cuanto al recurso de apelación deducido por la demandante Hotel Nippon S.A. respecto de la resolución que recibió la causa a prueba.**

**PRIMERO:** Que la recurrente, a través de un recurso de reposición con apelación subsidiaria, reproduciendo la resolución que recibió la causa a prueba, dictada el 25 de marzo de 2022, la objeta en primer término por haberse omitido un encabezado que hiciera mención expresa de lo que se estaba resolviendo, observación que fue íntegramente acogida por el tribunal a quo. Agrega que, sin perjuicio que la resolución transcrita recoge preliminarmente los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos necesarios para resolver la cuestión planteada, se incurre en ciertas imprecisiones que pretende se subsanen, modificando el punto de prueba N° 3, eliminando el N° 4 y agregando un nuevo punto.

**SEGUNDO:** Que a través de la resolución de 16 de mayo de 2022, se modificó parcialmente aquella que recibió la causa a prueba, en lo referido a cambiar la redacción del punto de prueba N° 3, manteniéndola en lo demás en



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNSXXNLXWC

términos que se ajusta a los hechos sustanciales y pertinentes controvertidos en la etapa de discusión.

**TERCERO:** Que, sin perjuicio de lo anterior, el abogado de la recurrente manifestó en estrados que esta apelación ha perdido oportunidad, lo que por lo demás se evidencia del estado de la causa, por lo que este recurso será rechazado.

**II.- En cuanto al recurso de casación en la forma deducido por la demandante.**

**CUARTO:** Que la demandante Hotel Nippon S.A. interpuso recurso de casación en la forma en contra de la sentencia definitiva, el que funda en la causal contemplada en el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, que establece textualmente: *“El recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes: 5ª En haber sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170”*, precisando que estima incumplido el número 4 del artículo 170, por no contener el fallo recurrido las consideraciones de hecho y de derecho que permiten justificar la decisión de acoger solo parcialmente la demanda interpuesta.

**QUINTO:** Que, en la especie, el perjuicio que pudiere haber sufrido la recurrente no es reparable con la sola invalidación del fallo, pues los defectos denunciados, en el evento de existir, podrían ser corregidos por la vía del recurso de apelación, también oportunamente deducido por la demandante, siendo la interposición conjunta de ambos recursos muestra que el recurrente no hace distinción entre la petición de invalidación y la alegación referente a los agravios que le produce la sentencia, constituyendo el análisis y resolución del segundo de los medios de impugnación deducido, plenamente suficiente para el objetivo de revisión pretendido por la recurrente, por lo que, haciendo uso de la facultad que concede el inciso penúltimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, se desestimaré este recurso de casación en la forma.

**III.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la demandante.**

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los tres últimos párrafos del motivo vigésimo y los considerandos vigésimo primero y vigésimo segundo, que se eliminan; y se tiene en su lugar, y además, presente:

**SEXTO:** Que en el contrato de prestación de servicios de residencia sanitaria celebrado entre Hotel Nippon S.A y el Mnisterio de Salud, a través de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNSXXNLXWC

la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el 11 de mayo de 2020, las partes convinieron un precio del contrato, considerando que la prestación había comenzado a otorgarse por la actora el 24 de marzo de 2020, de \$ 241.746.120. Este fue, además, el precio autorizado por Resolución Exenta N° 270, de 19 de mayo de 2020, del Subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, autorización que alcanza a la totalidad del contrato indicado.

**SÉPTIMO:** Que, concordante con lo anterior, la Subsecretaría indicada emitió la Orden de Compra N° 4127-304-SE20, enviada a Hotel Nippon S.A. el 19 de mayo de 2020, en la que especifica la adquisición de 36 habitaciones por 99 noches, desde marzo a junio, a un valor unitario de \$ 57.000, lo que importa un valor total, IVA incluido, ascendente a \$ 241.746.120.

**OCTAVO:** Que no existe, en consecuencia, una compra sujeta a condición, constituyendo las especificaciones de desglose del precio contenidas en la cláusula cuarta del contrato, que distingue entre valor habitación, alimentación, servicios y lavandería, parámetros meramente referenciales destinados a justificar por parte del Servicio Público el costo asumido en la contratación. Conforme a ello, habiendo cumplido la demandante con proporcionar los servicios de residencia sanitaria contratados, procede que la demandada pague lo convenido por ello, que es el precio único de \$ 241.746.120.

**NOVENO:** Que, estando contestes las partes en que la demandada pagó la suma de \$ 92.791.440, sin que se haya efectuado ningún otro pago o abono, corresponde ordenar el pago del saldo insoluto, ascendente \$ 148.954.680, IVA incluido, con que se completa el precio convenido en el contrato, por lo que habrá de acogerse el recurso de apelación sólo en cuanto se aumenta a la suma indicada el monto que debe pagar la demandada a la actora.

#### **IV.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por el demandado Fisco de Chile.**

**DÉCIMO:** Que se alza también la demandada, Fisco de Chile, en contra de la sentencia definitiva de autos, reclamando que no procede se le condene al pago de reajustes e intereses de la suma a que ha quedado obligado por la sentencia definitiva recurrida, conceptos que en el considerando vigésimo tercero del fallo de primera instancia se fijan, en cuanto a los reajustes, de acuerdo a la variación del IPC desde la fecha de notificación del fallo de primera instancia, en tanto que los intereses serán los corrientes para operaciones no reajustables desde que se constituya en mora a la demandada.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNSXXNLXWC

**UNDÉCIMO:** Que según razona correctamente el tribunal a quo, la sentencia que se dicte en este juicio tiene carácter declarativo, el que opera una vez que ella se encuentre ejecutoriada, de manera que los reajustes sólo pueden comenzar a correr cuando ello ocurra, por lo que, en este concepto, habrá de hacerse lugar a la apelación de la demandada, acogiendo su impugnación sobre la materia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes, 764, 766 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

I.- **Se rechaza** el recurso de casación en la forma interpuesto por el Hotel Nippon S.A. en contra de la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago en la causa Rol C 8951-2021;

II.- **Se revoca** la referida sentencia en lo relativo al monto ordenado pagar a la demandada, acogándose parcialmente la demanda deducida por Hotel Nippon S.A. en contra del Fisco de Chile, condenándolo al pago de la suma única y total de \$148.954.680, IVA incluido, por servicios de residencia sanitaria;

III.- La suma ordenada pagar se incrementará con reajustes de acuerdo a la variación de IPC calculados desde la fecha en que quede ejecutoriada y hasta la del pago efectivo, devengando intereses desde que el deudor se constituya en mora, del modo establecido en la sentencia de primera instancia;

IV.- **Se confirma**, en lo demás apelado, la referida sentencia.

Acordado el fallo con la **prevención** de la Ministra señora Sandra Araya respecto del fondo de la acción deducida y con el **voto en contra** en relación a la regulación de los reajustes.

**I.- En cuanto al fondo:**

1.- Que, quien previene, tiene además presente que el 11 de mayo de 2020, se suscribió un convenio de “Prestación de Servicios de Residencia Sanitaria” entre el Ministerio de Salud y el Hotel Nipón S.A, obligándose éste último a proveer un servicio integral de residencia sanitaria que comprendió el uso de habitaciones, alimentación, lavandería y servicio de atención personal, en el recinto hotelero antes identificado, que le permitiría a la autoridad enfrentar la crisis sanitaria producto de la pandemia COVID 2019, permitiendo el aislamiento seguro de las personas que fueran diagnosticadas como portadoras del referido virus.

2.- Que, si bien el párrafo primero de la cláusula cuarta del convenio suscrito entre las partes, establece que el Ministerio pagará “cómo precio



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNSXXNLXWC

máximo” por los servicios de residencia sanitaria un total de \$241.746.120, lo cierto es que a continuación inserta un cuadro en el que se establece que el precio convenido corresponde a la ocupación de 36 habitaciones por el tiempo que media entre marzo a junio del años 2020, señalando de forma expresa que el pago mensual convenido corresponde al 100% de las habitaciones disponibles. Es en ese entendido que, a continuación, se señala que el valor total, por día, del servicio de residencia sanitaria es de \$57.000, desglosándose a continuación el valor de habitación, alimentación, servicios y lavandería que componen el monto total diario antes referido.

3.- Que, en concordancia con lo anterior, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, emitió la Orden de Compra N° 4127-304-SE20, enviada a Hotel Nippon S.A. el 19 de mayo de 2020, en la que especifica la adquisición de 36 habitaciones por 99 noches, desde marzo a junio, a un valor unitario de \$ 57.000, lo que importa un valor total, IVA incluido, ascendente a \$ 241.746.120.

Lo anterior es relevante, toda vez que demuestra que la autoridad administrativa, ejecutó el contrato entendiendo que el objeto del mismo se vinculaba con la prestación de servicios de residencia sanitaria en relación al uso de un total de 36 habitaciones con sus respectivos servicios, fijándose un valor único a pagar, por el tiempo que media entre el mes de marzo y el 30 de junio de 2020, puesto que la referida orden se emitió antes del término del contrato, como se dijo, por el valor total del mismo.

4.- Que, por otra parte, la cláusula tercera del convenio, establece que éste entrará en vigencia a partir de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe; sin embargo, se deja expresa constancia respecto que, el Ministerio de Salud, requirió contar con la residencia sanitaria con anterioridad a la suscripción del contrato, cuestión que por ese acto se regulariza.

5.-Que, la demandada, señaló que el valor de \$241.746.120, correspondía al precio máximo a pagar, puesto que la Resolución Exenta N° 270 de 19 de mayo de 2020 que aprobó el convenio referido precedentemente, en su numeral 10.- estableció que el valor a pagar se calcularía en relación al uso efectivo por metro cuadrado, esgrimiendo la aplicación de la Resolución Exenta N° 209 de 25 de marzo del mismo año, que dispuso un precio máximo de arrendamiento de inmuebles, con el objeto de cumplir las medidas necesarias para hacer frente a la epidemia de COVID 19, estableciéndose el valor de 0,2 UF por metro cuadrado efectivamente utilizado. Es por lo anterior que el demandado alega la procedencia de un pago inferior al máximo



establecido en el convenio, toda vez que, según refiere, la ocupación del recinto fue menor a la indicada por la actora y, en ningún caso, llegó al 100%.

6.- Que, la alegación expuesta en el numeral precedente, debe ser desestimada, toda vez que si bien el convenio condiciona el pago a la aprobación del mismo a través de la resolución administrativa correspondiente, lo cierto es que no establece de modo alguno que el pago se realizaría en relación al metro cuadrado efectivamente utilizado. Todo lo contrario, según se expuso, en el mismo se dispuso el pago total por el 100% de las habitaciones con los respectivos servicios, cuestión que con posterioridad fue refrendada con la emisión de la orden de compra por parte de la autoridad administrativa.

En esta materia, se debe agregar que, si bien la autoridad administrativa se encuentra revestida de facultades que se denominan “exorbitantes”, toda vez que ésta no sólo establece las cláusulas, sino que goza, entre otras, de la facultad de modificarlas unilateralmente o de poner término anticipado del contrato ante determinadas circunstancias, lo cierto que es su uso no puede amparar la arbitrariedad, toda vez que aquello es contrario al principio de buena fe que debe regir en materia contractual.

Así, en el presente caso, la autoridad establece en la Resolución Exenta N° 270 de 19 de mayo de 2020, que aprueba el convenio, sin embargo, establece la procedencia de un pago en relación al metro cuadrado efectivamente utilizado, pretendiendo modificar lo expresamente pactado entre las partes, asilándose en un acto administrativo anterior a la suscripción del mismo, esto es la Resolución Exenta N° 209 de 25 de marzo del mismo año, cuestión que resulta del todo improcedente, pues tal conocimiento determina que, si la autoridad si pretendía aplicarlo, necesariamente debió dejar expresa constancia de aquello en el convenio suscrito, cuestión que no realizó.

Por el contrario, tal como se ha analizado, en el convenio expresamente se reguló una cifra única y total como valor por el total del servicio prestado por un tiempo determinado, cuestión que, además, fluye de la aplicación de las normas entregadas para la interpretación de los contratos.

7.- Que, en efecto, las normas de interpretación en materia contractual están reguladas en los artículos 1560 a 1566 del Código Civil, las que constituyen una herramienta entregada para determinar la intención de las partes, siempre considerando las circunstancias de la especie que hayan integrado el iter contractual.

En este sentido, el artículo 1560 del Código Civil presupone que la prevalencia de la intención de los contratantes por sobre lo literal de las



cláusulas o términos de su acuerdo queda supeditada a que aquélla se conozca “claramente”, es decir, de un modo palmario o manifiesto, descartando cualquier ambigüedad sobre el particular.

A su vez, la norma del artículo 1564 señala que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Esta norma, además, dispone que la interpretación puede asilarse en la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra.

Finalmente, se consagra como regla de clausura la contenida en el artículo 1566 que establece que las cláusulas ambiguas se interpretarán en contra de aquella parte que la haya extendido o dictado.

8.- Que, la aplicación de las normas antes referidas, determina la interpretación que se sostiene en esta prevención, respecto de la cláusula tercera y cuarta del convenio, toda vez que el demandado, esto es, la autoridad administrativa, es quien impuso los términos del contrato, estableciendo un valor total a pagar de \$241.746.120, por el uso de 36 habitaciones del Hotel Nipón –con los respectivos servicio- en entre los meses de marzo a junio, por lo que cualquier ambigüedad que fluya del tenor literal, en relación a la expresión “precio máximo”; conforme con el artículo 1566 del Código Civil, debe ser interpretada en su contra.

Asimismo, conforme con el artículo 1564 del mismo cuerpo legal, las referidas clausulas deben interpretarse unas con otras, procurando que aquellas tengan sentido, siendo trascendente la aplicación práctica del mismo, que en este caso queda de manifiesto con la conducta del órgano administrativo que, con anterioridad al vencimiento del contrato, emitió una orden de compra por el total del mismo.

9°.- Que, por otro lado, por las consideraciones expuestas, las pretensiones de la actora, vinculadas a la existencia de una sobreocupación del hotel fundada en que los pacientes recibidos excedieron el total que fue inicialmente programado, no pueden prosperar, puesto que, más allá que en este juicio no se logró acreditar de una forma fehaciente el número total de pacientes que fueron recibidos en el periodo regulado por el contrato, desconociéndose cuál fue el número exacto que efectivamente utilizó la residencia sanitaria, toda vez que ni quiera el acto administrativo que dispone el pago a la actora establece tal dato, siendo insuficiente la prueba rendida por la actora, lo relevante es que, como se plasmó en los fundamentos anteriores, las partes convinieron el pago de una suma única y total por el uso de las 36



habitaciones de la residencia sanitaria, que incluía valor de alimentación, servicios personales y lavandería, por el periodo expresamente establecido, por lo que la pretensión del pago de una suma superior a la pactada se estrella con el tenor del convenio.

## **II.- En cuanto a los reajustes.**

10.- Que los reajustes únicamente constituyen un equivalente monetario o cláusula que busca mantener el poder adquisitivo del dinero. En este contexto, se debe tener presente que el artículo 1568 del Código Civil dispone que el pago efectivo o solución es la prestación de lo que se debe y en este caso lo que se debe es un valor económico. Consecuentemente, el deudor sólo quedará libre de su obligación pagando al acreedor una suma de dinero que represente un poder adquisitivo análogo a la que de él recibió.

11.- Que, en cuanto al momento en que se devengan los reajustes, se debe tener en consideración que el cumplimiento de la obligación, como se señaló, debe importar el mantenimiento del monto que ella representa, por lo que, encontrándose establecido un incumplimiento contractual, la suma de dinero cuyo pago se ordena, debe comprender la disminución que ella ha sufrido por efecto de la desvalorización de la moneda, reflejada en la variación del índice de precios al consumidor entre la fecha en que debió hacerse el pago.

12.- Que, en consecuencia, los reajustes, en caso de accederse a una acción de cumplimiento de contrato, deben regularse a partir de la data en que la obligación se hizo exigible, cuestión que, en el caso concreto, aconteció en la fecha que debió procederse al pago de las sumas cuyo pago se ordena, toda vez que a partir de dicha fecha la demandante tenía derecho a recibir el valor de los servicios prestados a la demandada, cuestión que permite descartar la apelación del demandado, que busca establecer que las sumas dispuestas en el fallo se paguen con el reajuste correspondiente desde que el fallo quede ejecutoriado.

13.- Que, asentado lo anterior, cabe tener presente que el fallo de primer grado estableció que las sumas ordenadas pagar lo serán más reajustes de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de notificación del fallo, cuestión que si bien, a juicio de quien sostiene este voto, no es correcta, puesto estos deben otorgarse desde la fecha en que debió procederse al pago según el convenio suscrito entre las partes, lo cierto es que la actora no apeló de tal circunstancia, razón por la que no procede hacer declaración alguna en esta materia, más que confirmar aquello que fue apelado por el demandado.





Redactada por abogado Euclides Ortega Duclercq.

**Regístrese y devuélvase.**

**Civil N° 7476-2022 (acumulada N° 16383-2023)**

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Antonio Ulloa Márquez e integrada por la Ministra señora Sandra Araya Naranjo y por el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq. No firman la Ministra señora Araya por encontrarse ausente ni el Abogado Integrante señor Ortega por haber cesado sus funciones.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNSXXNLXWC

Proveído por el Señor Presidente de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a veintitres de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VNSXXNXLXWC